



**Ayuntamiento de Villabasta de Valdavia**  
**C/ Chirona 4**  
**34115 VILLABASTA DE VALDAVIA**  
**(Palencia)**

**Expediente: ACTUACIÓN DE OFICIO 2317/2020**

**Asunto: Vigilancia sanitaria del agua de consumo humano/ Exclusión/  
Villabasta de Valdavia**

Ilmo. Sr.:

De nuevo nos dirigimos a V.I. una vez recibido el informe solicitado en relación con el expediente de oficio que se tramita en esta Institución con el número arriba indicado, referencia a la que rogamos haga mención en ulteriores contactos que llegue a tener con nosotros.

Como recordará, el motivo de la **actuación de oficio** era que su municipio, está excluido del control sanitario del agua de consumo humano que efectúa la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León desde noviembre de 2018.

Al parecer se habría solicitado y obtenido la exclusión al amparo de lo establecido en el art. 3.3 b) de la Orden SAN/132/2015, de 20 de febrero, por la que se desarrolla parcialmente el RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, lo que podría perjudicar seriamente a la población abastecida (tanto la residente como la población flotante) a la que a partir de ese momento no se le estaría prestando de manera adecuada este servicio público mínimo y de carácter esencial.

Iniciada la investigación oportuna, se le solicitó información en relación con las cuestiones planteadas en aquella.

En atención a dicha petición de información se remitió informe en el cual se hacía constar:

*“1º.- Que la organización del servicio de abastecimiento de agua de esta localidad siempre se ha prestado por el Ayuntamiento mediante la aplicación de la oportuna Ordenanza reguladora aprobada hace más de 30 años y que sus tarifas siguen vigentes al no haber sido actualizadas. Dicha Ordenanza fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 25 de Octubre de 2001 para su adaptación al Euro y es la se encuentra en vigor al día de la fecha. (Se adjunta copia de la*



publicación de la Ordenanza en el B.O.P. el día 31 de Diciembre de 2001 para su adaptación al Euro).

2º.- Las razones que llevaron al Ayuntamiento a dejar de clorar el agua en aplicación del artículo 3.3 b) de la Orden SAN/132/2015, fueron que las 8 viviendas abiertas durante el año (15 vecinos) no querían que se clorase el agua, ya que el abastecimiento es una captación de un pozo artesiano de 280 metros de profundidad y la población flotante en época estival apenas se ve incrementada (4 viviendas más) y nunca ha habido quejas, ni reclamaciones, ni problemas con el servicio de abastecimiento de agua. Por parte de la Autoridad sanitaria se nos hizo la indicación de solicitar la exclusión si el Ayuntamiento iba a dejar de clorar el agua. (Se adjunta copia de la solicitud y copia de la autorización obtenida por parte de la Autoridad Sanitaria)

3º.- Que por la no cloración del agua este Ayuntamiento no ha disminuido la tasa insignificante que viene aplicando de (0,45 € mes x 12 meses 5,40 € más el 10% de Iva al año), como se puede observar en la Ordenanza que se adjunta al presente escrito. De todas formas el mayor consumo se produce por la existencia de varias cuerdas con mucha ganadería. La citada tarifa se aplica a los vecinos de la localidad desde hace más de 30 años.

4º.- El número de personas que viven de continuo en el Municipio durante el año es de unos 15 vecinos distribuidos en 8 viviendas abiertas, y en los meses de verano se incrementan en 10 personas distribuidos en 4 viviendas. Que este Ayuntamiento nunca ha tenido ningún problema microbiológico, químico ni de cualquier otra índole. Que como hemos informado anteriormente, existe una captación de aguas subterráneas de 280 metros de profundidad con agua de muy buena calidad según los análisis realizados cuando se hizo la captación hace más de 20 años. Que la red de abastecimiento de agua fue renovada hace 15 años, así como el depósito y los motores de elevación de agua con subvenciones de la Diputación Provincial. En los últimos 5 años lo que se ha tenido que cambiar han sido los motores de elevación de aguas que suelen fallar.

5º.- El Ayuntamiento ejerce las funciones de control del abastecimiento como viene siendo habitual, con la única exención de la cloración del agua que tenemos autorizada por la Autoridad Sanitaria. En este Municipio nunca ha faltado el agua y cuando surge algún problema el Ayuntamiento inmediatamente lo soluciona para prestar el servicio. Nunca ha habido quejas y la pequeña población existente está de acuerdo con dicha medida.

6º.- Como se ha informado, desde que se autorizó por Sanidad la exclusión de clorar el agua en Diciembre de 2018, no se ha vuelto a clorar el agua y la empresa AQM que realizaba los análisis dejó de prestar el servicio.



7º.- Como hemos dicho anteriormente, ante este Ayuntamiento no se ha presentado reclamación ni queja alguna por lo no cloración del agua y desde que fue autorizada la no cloración del agua ha permanecido y permanece expuesta el público en el tablón de anuncios copia del edicto que se acompaña a la presente”.

A la vista de la información recabada, nos gustaría trasladarle algunas consideraciones. Lo primero que queremos resaltar es que, en relación con la cuestión que le planteamos en nuestra petición de información y durante estos últimos años, se han venido tramitando por esta Defensoría distintas actuaciones de oficio a las cuales efectuaremos continuas alusiones durante nuestra exposición dada la evidente relación e incidencia que va a tener en las consideraciones que hemos de efectuar a ese Ayuntamiento.

Como V.I. probablemente conoce la Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas a consumo humano consideró necesario establecer a escala comunitaria unas normas de calidad básica que debían cumplir las mismas, dada su evidente importancia y repercusión en la salud general de toda la población.

Esta norma prevé, en su art. 3 una serie de exenciones a la aplicación de la Directiva entre las que se encuentra en su punto 2 b) las aguas destinadas a consumo humano procedentes de una fuente de suministro individual que produzca como media menos de 10m<sup>3</sup> diarios o que abastezca a menos de cincuenta personas, a no ser que estas aguas sean suministradas como parte de una actividad comercial o pública. La Directiva citada fue traspuesta al ordenamiento español por el **RD 140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano**, fijando en el art. 3 su ámbito de aplicación, aludiendo a todas las aguas definidas en el art 2.1 como aguas de consumo humano y que incluye a las suministradas como parte de una actividad comercial o pública, con independencia del volumen medio de agua suministrado.

Se excluyen expresamente del ámbito de aplicación del RD 140/2003 -art. 3.2 f)- y en lo que ahora puede resultar de interés:

*“Todas aquellas aguas de consumo humano procedentes de un abastecimiento individual y domiciliario o fuente natural que suministre como media menos de 10m<sup>3</sup> diarios de agua o que abastezca a menos de 50 personas, excepto cuando se perciba un riesgo potencial para la salud de las personas derivado de la calidad del agua, en cuyo caso la autoridad sanitaria requerirá a la administración local que adopte, para estos abastecimientos, las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en este Real Decreto”.*

Parece claro, a nuestro juicio, que ambas disposiciones únicamente excluyen las aguas de consumo humano de abastecimientos individuales y/o domiciliarios que



abastezcan a menos de 50 personas, pero no excluirían a los suministros públicos, como sin duda son los ofrecidos por los Ayuntamientos, independientemente de la población que resida permanentemente en los respectivos núcleos de población que los conforman, puesto que a los suministros públicos se les supone un “plus de garantía” derivada de su propia consideración como **servicio público de prestación y recepción obligatoria**.

Como sabe y conforme establece el RD 140/2003 “*la vigilancia sanitaria del agua de consumo humano es responsabilidad de la autoridad sanitaria, quien velará para que se realicen las inspecciones sanitarias periódicas en el abastecimiento (...) "La autoridad sanitaria elaborará y pondrá a disposición de los gestores (...) el Programa de vigilancia sanitaria del agua de consumo humano para su territorio, que remitirá al Ministerio de Sanidad y Consumo"*”.

El Programa de Vigilancia Sanitaria del Agua en Castilla y León (en adelante PVS) se incluyó en el III Plan de Salud de Castilla y León y resultó exigible a partir del **1 de marzo de 2009**. Dicho programa establecía una serie de actuaciones para garantizar los objetivos de protección a la salud de la totalidad de la población de Castilla y León, fijándose como **objetivo general** del mismo **el control y vigilancia eficiente** de las aguas de consumo humano y entre los objetivos específicos la concreción de responsabilidades, obligaciones y competencias de cada una de las partes implicadas en el abastecimiento, así como la planificación de la vigilancia sanitaria a efectuar.

**Las responsabilidades recaen fundamentalmente en los municipios (apartado 5 del PVS y art. 4 y siguientes Dec 140/2003)** reservándose la autoridad sanitaria las medidas de vigilancia del sistema creado.

Transcurridos varios años de funcionamiento de este diseño, que requirió de fuertes inversiones económicas sobre todo para dotar de infraestructuras y medios a los servicios municipales en cumplimiento de las determinaciones del RD 140/2003 y del PVS, en febrero de 2015 se publica la Orden SAN/132/2015 por la que se desarrolla parcialmente el RD 140/2003 y, en lo que ahora resulta de interés, viene a definir abastecimiento menor - art. 2.3- como: “*aquel abastecimiento cerrado de titularidad pública y carácter domiciliario que suministre menos de 10 m<sup>3</sup> diarios de agua o que abastezca a menos de 50 personas, y que no abastezca a ninguna industria alimentaria, ni a ningún establecimiento comercial público con potencial uso de boca entre sus clientes*”.

A continuación, en el art. 3.3 de la Orden SAN/132/2015 señala: “*Asimismo, y de conformidad con lo previsto en la letra f) del apartado 2 del art. 3 del RD 140/2003, de 7 de febrero, quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente disposición:*

*a) las aguas de consumo humano, que se distribuyan a través de redes de titularidad privada que suministren menos de 10m<sup>3</sup> diarios o que abastezcan a menos de 50 personas.*



*b) los abastecimientos menores para los que la autoridad local haya solicitado expresamente su exclusión, mediante la presentación de una comunicación dirigida al Servicio Territorial competente en materia de sanidad de la provincia en la que se encuentre. En esta comunicación constará de manera expresa que se ha informado a la población abastecida de que el agua no está desinfectada, controlada, ni vigilada, y se indicará el medio por el cual se ha informado. La información a la población abastecida deberá ser reiterada al menos una vez cada 4 años*”.

Como primera reflexión debemos apuntar, y así se lo hemos indicado expresamente a la Consejería competente en la resolución que formulamos en la actuación de oficio **20170473**, que a nuestro juicio la Orden parece exceder lo dispuesto por el RD 140/2003 y la Directiva que la norma estatal traspone, **pues ni en una ni en otra se permite la exclusión en los casos de suministros públicos**, tan solo los individuales y domiciliarios o procedentes de fuentes naturales siempre que cumplan con los requisitos de m<sup>3</sup> y/o de número mínimo de personas abastecidas.

No prevé la norma estatal que un suministro público, de la entidad que sea, pueda quedar al margen de los sistemas de garantía creados para todos (no solo al margen de la vigilancia de la autoridad sanitaria, sino también del control municipal y de la realización de las necesarias labores de desinfección) y ello simplemente por la petición de la autoridad local y únicamente verificando (la Consejería nos indica que lo único que hace es “tomar nota” de la auto exclusión municipal) que se ha informado a los vecinos.

Resulta absolutamente contradictorio que un vecino residente en una localidad excluida del control sanitario tenga garantizada la salubridad y la desinfección del agua si se le suministra a través de cisternas o depósitos móviles (art. 11 RD 140/2003 y apartado 7 PVS) y no del agua que recibe a través de la red de distribución de su localidad y por la que ha abonado los costes (directos o indirectos) derivados de su implantación y las correspondientes tasas.

La disposición citada, además, parece chocar con el resto del articulado del RD 140/2003, y para que sus disposiciones no resultaran aplicables a los abastecimientos así excluidos no deberían ser considerados abastecimientos de agua de consumo humano, cosa que de manera evidente no es posible hacer puesto que **se facilita el agua por las entidades locales** para beber, cocinar, lavarse y atender el resto de necesidades de los habitantes de la entidad local, que son habitantes del municipio y por ello tienen derecho a recibir determinados servicios básicos entre los que se encuentra el suministro de agua potable (sobre ello volveremos más adelante).

Como “aguas de consumo humano” **deben ser desinfectadas obligatoriamente**<sup>1</sup> – art. 10.2 RD 140/2003-, **debe proporcionarse por la administración unos mínimos**

---

<sup>1</sup> Como señala la OMS en su última guía para la calidad del agua potable **la desinfección** es una



**de suministro adecuados** – art. 7.1 RD 140-2003 y en definitiva debe garantizarse el acceso al suministro por parte de la administración ya que el suministro de agua potable tiene la consideración de derecho humano básico y está implícito en el derecho a la vida, en el derecho a la protección a la salud y el medio ambiente y en el derecho a una vivienda digna y adecuada, entre otros.

Como V.I. quizá conozca la proclamación en España del derecho humano al agua no requiere de una declaración explícita, ya que conforme establece el art. 10.2 CE “*Las normas relativas a los derechos fundamentales y a libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España*”, de esta manera es directamente aplicable en nuestro país la resolución 64/292 de la Asamblea General de la ONU, 28 de julio de 2010, que reconoce el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y del resto de derechos humanos.<sup>2</sup>

A nuestro modo de ver, la norma reglamentaria autonómica obvia la consideración del derecho al agua potable como derecho humano **ya que excluye a determinados ciudadanos, por el hecho de residir, habitual o eventualmente en una población de menor dimensión, del acceso a un derecho que a todos nos corresponde.**

Además, a nuestro juicio, la Orden SAN/132/2015 en el artículo mencionado, vulneraría lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local y en la Ley de Régimen Local de Castilla y León, dado que el servicio de abastecimiento de agua potable es un servicio público mínimo y básico (artículos 25 y 26 LBRL), que el Tribunal Supremo califica como de “asistencia vital”.

Derivado de este carácter de servicio público, las relaciones del usuario con la administración **se concretan en su derecho al establecimiento del servicio, al buen funcionamiento de éste, y al acceso a su prestación en condiciones de igualdad.**

El artículo 18.1 g) de la LBRL reconoce a los vecinos el **derecho a exigir** la prestación, y en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público.

En relación con el buen funcionamiento del servicio recordamos, que la continuidad en la prestación es una de las características básicas de todo servicio

---

operación de **importancia incuestionable** para el suministro de agua potable, ya que es la única barrera eficaz para la destrucción de numerosos agentes patógenos (principalmente las bacterias) e impide su proliferación a través de los sistemas de distribución.

<sup>2</sup> El Defensor del Pueblo viene dando, conforme a sus funciones, difusión a este reconocimiento, instando a los poderes públicos y autoridades españolas a tenerlo en cuenta en su actuación (Cfr. Derecho al Agua, XII informe sobre derechos humanos, Federación Iberoamericana de Ombudsman, páginas 421 y ss)



público, continuidad que se traduce, desde el punto de vista del usuario, en su derecho a la calidad y a la regularidad (calidad definida en cuanto a la calidad sanitaria del agua de consumo en el RD 140/2003, por referirnos más estrictamente a la cuestión que hoy nos ocupa, calidad sanitaria que no ofrece un suministro público sin desinfección, sin control y sin vigilancia sanitaria), lo que incluso podría llevar a considerar que no se presta el servicio público.

Por todas estas razones nos dirigimos, en su momento, a la Consejería de Sanidad mediante resolución sugiriéndole:

*“Que se modifique o se deje sin efecto la previsión que se contiene en el artículo 3.3 b) la Orden SAN/132/2015 en relación con los abastecimientos menores, por ser contraria a lo establecido en el RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad de agua de consumo humano y demás normativa de aplicación.*

*Que por su parte se garantice la salubridad y la completa vigilancia sanitaria de este suministro vital, que ha sido reconocido como derecho humano básico, en todo nuestro ámbito territorial, en cumplimiento de un básico principio de igualdad”.*

La Consejería de Sanidad **rechazó nuestra resolución**, manifestando que la exclusión del programa de vigilancia sanitaria del agua de consumo de los abastecimientos menores que así lo soliciten no quita para que las pequeñas entidades locales que quieran puedan seguir realizando controles sanitarios si así lo desean, señalando que **esta exclusión es una decisión exclusiva de la autoridad local en el ámbito de su responsabilidad**. Pese a tal rechazo la Consejería nos manifestó que sometería a valoración y estudio la resolución en el sentido de cuidar de la mejor forma posible la salud de los ciudadanos.

Por ello más recientemente hemos vuelto a dirigir a la Consejería de Sanidad, esta vez en el marco del expediente de oficio **0369/2020**, al conocer que cada vez eran más los Ayuntamientos que auto-excluían a localidades de su ámbito territorial del control sanitario del agua de consumo, asumiendo así la autoridad municipal en exclusividad y bajo su propia responsabilidad la garantía sanitaria del agua que proporcionan a sus vecinos.

Esta Defensoría no puede permanecer impasible ante la proliferación por el territorio de este tipo de medidas que impactan de manera tan evidente en la calidad de vida y la salud de las personas que residen en las poblaciones más pequeñas y en el medio rural, las cuales además de verse privadas de otro tipo de servicios necesarios, observan cómo ni siquiera se garantiza su derecho a un servicio público básico y esencial, pues no es tal el **suministro de agua sin desinfectar, sin controlar y respecto del cual no se efectúa por la autoridad competente la oportuna vigilancia sanitaria**.



Por ello nos dirigimos nuevamente a la Consejería de Sanidad mediante resolución y hemos solicitado información a todos los Ayuntamientos, como el suyo, que mantienen abastecimientos sin control sanitario **en un intento de revertir esta situación**, que nos preocupa especialmente en este momento de crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia provocada por el Covid-19, que está acercando a muchas personas a las zonas rurales en un intento de encontrar en ellas una mayor calidad de vida que la que se ofrece en las grandes ciudades, y que no existirá en poblaciones con suministros públicos sin desinfección y sin vigilancia.

Como V.I. conoce perfectamente, la OMS señala que el suministro del agua para consumo humano y el saneamiento **son elementos esenciales para la protección de la salud humana durante todos los brotes de enfermedades infecciosas**. A día de hoy **hay consenso** en distintas organizaciones científicas, como la Organización Mundial de la Salud, el ECDC/CDC (Centers for Disease Control and Prevention) y la EPA (Environmental Protection Agency) **en que el virus SARS-CoV-2 no ha sido detectado en aguas de consumo cuando están tratadas al menos con filtración y desinfección, ya que estos tratamientos eliminan o inactivan el coronavirus.**

Por ello, resulta **imprescindible** que **todas las aguas de consumo humano** sean convenientemente **desinfectadas**, ya que sólo así pueden ser seguras para beber, cocinar y para su uso higiénico, máxime teniendo en cuenta la importancia capital que la higiene de manos tienen en el control de la pandemia. **Un mínimo de prudencia en la situación actual aconseja que se retomen las labores de desinfección en todos los suministros auto-excluidos**, asegurando así el adecuado nivel de protección para todos los ciudadanos y en este sentido hemos formulado la oportuna resolución a la Consejería de Sanidad, en el expediente **0369/2020** al que hemos hecho referencia anteriormente.

En ella además de sugerirle la modificación de la previsión normativa que se contiene en el artículo 3.3 de la Orden SAN/132/2015 en línea con nuestro anterior pronunciamiento, instamos a la Consejería a realizar las modificaciones necesarias para que en todos estos abastecimientos menores se vuelvan a efectuar, al menos, las labores de desinfección y/o filtración del agua suministrada, asegurando así la protección de todos los ciudadanos, no solo frente al virus SARS-CoV-2, sino frente a cualquier otra infección vírica que pudiera aparecer en el futuro.

La resolución formulada ha sido aceptada parcialmente por la Consejería de Sanidad, señalando que el espíritu de la Orden SAN/132/2015 es regular la demanda reiterada de los pequeños núcleos de población sobre la exención de la Vigilancia Sanitaria del Agua de consumo humano (en adelante ACH) sobre el sistema de control del ACH, **el cual es responsabilidad de los municipios**, de unos abastecimientos que no disponen de sistema de control del agua de consumo por motivos que se escapan a la competencia de este Centro Directivo.



Añade la Consejería de Sanidad en su respuesta que, en relación con la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, que desde este Centro Directivo se remitió un comunicado por correo electrónico a los Ayuntamientos relativo a las gestiones sobre la desinfección de los abastecimientos, por lo que los núcleos de población pedáneos y/o juntas vecinales habrán recibido las instrucciones de sus Ayuntamientos, y en este sentido hay una nota informativa publicada en el Portal de salud / Sanidad Ambiental-Covid 19- de fecha 10 de abril de 2020.

La información proporcionada en el portal de salud de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León coincide sustancialmente con el contenido de nuestra resolución, aunque no se refiere específicamente a la situación en la que se encuentran los abastecimientos menores auto-excluidos como el analizados en este expediente, limitándose a reproducir literalmente el contenido de las recomendaciones que al respecto formuló el Ministerio de Sanidad.

Por ello y dada la importancia del tema, e independientemente de la decisión que ha adoptado la Consejería de Sanidad que se limita a reiterar sus anteriores argumentos en relación con la exclusiva responsabilidad municipal sobre esta cuestión, nos gustaría sensibilizar a ese Ayuntamiento en relación con todos estos argumentos y otros que a nuestro juicio debe tener muy presentes en relación con el suministro de agua potable en su localidad.

En este sentido debemos insistir en recordarle que el RD 140/2003 al establecer las responsabilidades y competencias en su ámbito de aplicación señala (art. 4.1) que los **municipios son responsables** de asegurar que el agua suministrada a través de **cualquier red de distribución, cisterna o depósito móvil en su ámbito territorial sea apta para el consumo en el punto de entrega al consumidor.**

Por ello creemos que para ese **municipio resulta perjudicial eximirse de la vigilancia sanitaria del agua** puesto que dejará de contar para su labor con el respaldo de la autoridad sanitaria, **y ello sin que cambie su situación como responsable (y garante) de la inocuidad y calidad sanitaria del abastecimiento**, lo que le obligará a actuar aún con mayor celo ante situaciones de incumplimiento o de incidencias que puedan afectar a la salud de la población<sup>3</sup>.

En relación con la desinfección del agua de consumo, y la situación que se produce en su municipio en el que al parecer los vecinos no quieren que exista cloración, recordarle que no son los vecinos los que deciden como deben prestarse los servicios públicos, y tampoco los vecinos pueden decidir en relación con el cumplimiento de una norma, en el sentido de optar o no por la cloración, **máxime cuando es posible pedir a la autoridad sanitaria la exención de desinfectante residual (art. 10.2 RD 140/2003), sin afectar al mismo tiempo al control sanitario**

---

<sup>3</sup> Incidencias que sin duda se producirán si no desinfectan el agua que se suministra.



**de los abastecimientos que es lo que ha ocurrido en este caso, puesto que la exención solicitada y obtenida lo es de la vigilancia sanitaria y no solo de la cloración.**

Por otra parte debemos recordar que el artículo 29 del RD 140/2003 señala que la **información que debe ofrecerse al consumidor** debe ser puntual, suficiente, adecuada y **actualizada**, sobre todos y cada uno de los aspectos descritos en el RD 140/2003.

En este sentido nos parece que resulta necesario que **siempre y en todo momento** se muestre, a la vista de todos los vecinos y de cualquier otra persona que eventualmente pudiera residir o transitar por su municipio, que el agua no está desinfectada, controlada ni vigilada, y que es la ofrecida por la entidad local en este caso a la vista del bando que nos ha remitido, que está fechado en noviembre de 2018.

Como hemos indicado a otras administraciones locales que se encuentran en esta misma situación, el aviso en relación con el agua de consumo debe ser mostrado de forma permanente y visible, aunque somos conscientes que este aviso, sin duda, influirá muy negativamente en estas localidades puesto que desincentivara cualquier intento de empadronamiento y llegada de nuevos residentes, o de negocios, rehabilitaciones de edificios, incluso probablemente repercutirá negativamente en el precio de los inmuebles de la zona, pues nadie adquiere un inmueble en una localidad que no cuenta con un suministro fiable de agua potable, pero es el único modo de garantizar la salud de toda la población, tanto la residente como la flotante.

En virtud de todo lo expuesto, y al amparo de las facultades conferidas por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y por la Ley 2/1994, de 9 de marzo, del Procurador del Común consideramos oportuno formular la siguiente **Recomendación**:

**Que por parte de la administración local que V.I. preside o bien se deje sin efecto la solicitud de exclusión expresa del abastecimiento de agua de consumo humano de su municipio de la aplicación de la Orden SAN/132/2015, de 20 de febrero - formulada al amparo de lo establecido en su art. 3.3 b)-, ya que dicha disposición resulta contraria a lo establecido en el RD 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios del agua de consumo humano, o bien se solicite nuevamente su inclusión, ya que a la vista de las responsabilidades municipales resulta conveniente que sus actuaciones en relación con el agua de consumo vengán respaldadas por la oportuna vigilancia sanitaria.**

**Que, en su caso, valore la posibilidad de retomar las labores de desinfección en el agua de consumo, procediendo a efectuar los análisis previstos en el RD 140/2003 (Anexo V) o bien se solicite expresamente la exención de desinfectante residual (art. 10.2 RD 140/2003) si tal cosa resulta su interés.**



PROCURADOR DEL COMÚN  
DE CASTILLA Y LEÓN

**Que, en todo caso, se mantenga permanente y adecuadamente informados de todas estas circunstancias y de la situación concreta del abastecimiento de agua potable a todos los ciudadanos que pudieran verse afectados por estos suministros.**

Esta es nuestra recomendación y así se la hacemos saber, con el ruego de que nos comunique de forma motivada la aceptación o no aceptación de la misma en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley Reguladora de la Institución.

Una vez realizadas las comunicaciones oportunas, se acuerda publicar la presente Resolución en la página web de esta Institución, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.

Pendiente de sus noticias, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

EL PROCURADOR DEL COMÚN

Tomás Quintana López